

ESPECIAL MINERÍA Y ENERGÍA / LATINOAMÉRICA / PORTADA / PUEBLOS

Minería y posconflicto en Colombia

El Ciudadano · 25 de junio de 2014



Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión.

Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.

Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el **Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)**, desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.

Detrás de la uniformidad de las fachadas, el **Cauca** es el departamento más diverso del país: la mitad son indios y negros, a partes iguales; un cuarto, o más, mestizos. La zona montañosa es indígena. La costa del **Pacífico** es afro. Sin embargo, en la **Universidad del Cauca** no había sino estudiantes

blancos, hasta que las autoridades abrieron cupos para las “minorías”: cien afros y 400 indígenas en 14.000 estudiantes es todo lo que consiguieron.

TRAMAS Y MINGAS

Del 9 al 11 de junio la Universidad del Cauca organizó la segunda edición del encuentro ‘Tramas y Mingas’, ordenado en torno a cuatro ejes: vida y resistencia; economía y comunidad; poder y autonomía; educación y comunicación. El espacio lo llenaron “sabedores” y “sabedoras” de comunidades indígenas, afros y campesinas, que entrelazaron sus experiencias compartiendo sus modos de resistir y crear nuevas formas de vida.

Por la *minga* (trabajo colectivo) desfilaron las palabras de mujeres como **Concepción Matabanchoy**, que lleva casi cuatro décadas en una experiencia campesina en **La Cocha**, en el sureño **Pasto**, donde las mujeres son las más activas. “El primer paso fue valorarnos a nosotras mismas” dijo, mientras explicaba cómo trabajan la tierra de forma sostenible, mientras los niños aprenden los ecosistemas jugando y los varones son presionados para superar el machismo.

Habló de cinco necesidades, bien diferentes a las “necesidades básicas” que define el **Banco Mundial** para implementar sus políticas hacia los pobres: necesidad de afecto, de capacitación, de entendimiento, de creatividad y de trascendencia, en referencia al relevo generacional que deben afrontar todos los movimientos. La **Asociación para el Desarrollo Campesino** recuperó el bosque desde que decidió que la madera no es mercancía sino protección del suelo, y recuperaron 49 variedades de papas.

Melba Patricia Arias del **Comité de Mujeres de Inzá**, explicó que las campesinas crearon 35 grupos de autoayuda económica de 20 personas cada uno, que funcionan como cajas de ahorro veredales. El fondo social de las 700 mujeres permite prestar con bajo interés a las socias y lo consideran un modo de “hacerle una pequeña brecha al capitalismo”.

Ever Castro y **Socorro Andrade** no necesitaron explicar lo que hace la escuela **Vueltas del Patico**, en el resguardo **Puracé**, porque fueron los propios niños los que nos mostraron cómo la currícula escolar se organiza en torno a una huerta orgánica, en la que participan maestros, padres y alumnos. Además de la huerta orgánica, erradicaron la comida chatarra y montaron una “guardería biótica” que se rige por el lema “aprender en movimiento”.

{destacado-1}

Los chicos eligen un **Cabildo Escolar**, igual que los indígenas, y llegaron al encuentro con sus bastones de mando. “Eso libera el liderazgo que cada uno llevamos dentro, les permite asumir responsabilidades y aprender conviviendo”, explicó Ever Castro. Defendió la idea de que “quien no hace

soberanía alimentaria no puede hablar de soberanía alimentaria”, lo que pareció una buena forma de combatir a los técnicos que practican el doble discurso.

Hubo mucho más, imposible de resumir. El taita **Javier Calambás**, misak de **Guambia** de 80 años, fundador del **Cric**, reflexionó sobre las diferencias entre los modos de organizarse de los sindicatos y de los pueblos indios. “Los cabildos (autoridad indígena) no caben en el movimiento campesino. No luchamos por la tierra sino por los ríos, el agua, la vida”.

Mario López, del resguardo coconuco y también fundador del Cric, hizo una profunda reflexión sobre el trueque entre comunidades. “Los de tierra fría intercambian sus productos con los de tierra caliente, pero no les sirve el dinero para eso. Es lo que nosotros llamamos mercado”. Un intercambio por fuera de la lógica del capital. Dijo que “los dineros que manda el gobierno producen divisiones cuando no se sabe para qué se reciben esos fondos”.

Hugo Blanco, quechua del **Perú**, destacó la “ética indígena originaria de la humanidad” como camino para superar la crisis civilizatoria que atravesamos. **Oscar Olivera**, dirigente de la Guerra del Agua en Cochabamba (**Bolivia**), enfatizó en que los cambios vienen de abajo y que “se trata de construir alternativas por fuera del Estado”. Gracias a los indios, dijo, los obreros fabriles aprendimos “la construcción colectiva de las decisiones y la reapropiación social de lo público”.

Fue un encuentro en el que se destacaron las construcciones, en un departamento saturado de violencia y extractivismo salvaje. Se habló de la “economía propia”, de los modos de producir y reproducir la vida en cada pueblo, en base a criterios propios. Una vez más constatamos que existen infinidad de emprendimientos para producir alimentos, casi todos promovidos por mujeres, que no distinguen entre producción y reproducción porque son dos facetas inseparables de la vida.

EL TERROR DE LAS RETROEXCAVADORAS

El 1 de mayo hubo un derrumbe en una mina ilegal en el Cauca. “Un talud de tierra sepultó por lo menos 23 personas en la mina de explotación aurífera, cerca del municipio de **Santander de Quilichao** en el Cauca, en el suroeste del país”, provocando la muerte de tres mineros[1].

Según la **Defensoría del Pueblo**, en la zona no se pueden realizar controles por las amenazas de los grupos armados. Según el organismo, “miembros del sexto frente de las **Farc** que tiene presencia en esa zona, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras”[2]. El ministro de **Trabajo**, **Rafael Pardo**, dijo que 5.000 niños trabajan en las minas, muchos de ellos usados para que exploren los delgados túneles por donde los adultos no caben.

Apenas una semana antes, otro accidente en una mina de oro en el municipio de **Buriticá**, **Antioquia**, que “dejó al menos cuatro muertos y 81 heridos”[3]. En **Colombia** hay 14 mil unidades de producción

minera, de las cuales el 56% carece de licencia de explotación.

En febrero, otro accidente minero con un saldo de cinco muertos y diez heridos en una mina de oro ubicada en el departamento de **Nariño**, fronterizo con **Ecuador**[4]. El boom minero y la ilegalidad facilitan la proliferación de explotaciones en pésimas condiciones de seguridad.

En 2010 se encontraban en trámite unas 26 millones de hectáreas para la minería, el 23% del territorio de Colombia. De las tres millones de hectáreas del departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.

En el departamento hay dos tipos de minería. Por un lado, la artesanal, que la practican desde siempre indígenas, afros y campesinos como forma de sobrevivencia, con tecnologías manuales. Por otro, la minería mediana, que utiliza retroexcavadoras, dragas y planchones, es informal e ilegal, y extrae sobre todo oro, plata y platino.

Las excavadoras comenzaron a llegar en la década de 1990 y están provocando un repliegue de la minería artesanal, en gran medida expulsada por los actores armados y también porque con las excavadoras “se destruyó gran parte de las pendientes en los alrededores de los ríos”[5].

En el **Comité de Integración del Macizo Colombiano** (Cima), convocaron una reunión para debatir el problema minero y convocar una **Audiencia Minero-Energética Regional** en el mes de octubre[6]. Una gran ronda de treinta personas va desgranando los problemas zona por zona. Un integrante del **Proceso Campesino de la Vega** señala que “tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas en solicitud para minería de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país”.

Una mujer afro del colectivo **Cococauca**, del municipio de **Timbiquí**, sobre el Pacífico, detalla el modo de operar de la minería: “Las retroexcavadoras trabajan 22 horas al día y en las dos horas de descanso los artesanales entran a la mina. Contaminan todas las fuentes de agua que son las bases de la vida en la región. Ahora un minero artesanal gana seis millones de pesos a la semana (tres mil dólares) y eso cambia los valores y consumos de la gente”.

Los dueños de las retroexcavadoras contratan a la población de las veredas para que los ayuden a atravesar por los ríos y los lugares más difíciles, lo que hacen a pulso ayudados por cuerdas. Pagan muy bien. “Se disparó la prostitución y la deserción escolar”, explica con tristeza.

En la zona norte del Cauca, la población está dividida y las comunidades indígenas presentan actitudes opuestas. Algunos resguardos, como **Caldono** y **Canoas**, se pronunciaron contra la minería, pero en otros como **Tacuyó** y **Las Delicias** hace muchos años hay actividades mineras. “Depende de la

fuerza del cabildo”, explica un joven nasa de la **Asociación de Cabildos del Norte del Cauca** (Acin).

“Algunas comunidades se dedicaron a tapar con tierra los socavones, pero en otras son los jóvenes los más empeñados en trabajar en la mina”. Con la minería no sólo se producen divisiones, sino que empieza la explotación entre los propios indígenas.

En el municipio de **Buenos Aires**, al norte del departamento, la relación de la comunidad con la minería ilegal es bien compleja. La población es mayoritariamente negra, otra parte es indígena, pero han perdido el control sobre la extracción, dominada por los paramilitares del **Bloque Calima**. “La gente vende su tierra o la echan por la fuerza”, explica. “Excavan pozos gigantes donde se meten cientos de personas”.

Más de 10 mil hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales. La tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. “Cuando fuimos a sacar los retroexcavadores casi nos damos machete entre los mismos comuneros”, señala un nasa, destacando los problemas de alcoholismo que se registran en el entorno de las minas.

DE LA COCA AL ORO

La minería suele asentarse sobre los territorios étnicos. Lo hace por la fuerza, subordinando o desplazando a las poblaciones que están asentadas desde hace siglos. Un modo muy similar al de los monocultivos.

El informe de Coconauca[7], señala que en la región del Pacífico “el territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado cuyas consecuencias se reflejan en la migración y desplazamiento forzado”[8].

Agrega que el ministerio de **Minas y Energía** ha expedido títulos sobre los territorios étnicos que tienen propiedad colectiva, a favor de empresas multinacionales y agentes locales. En los tres municipios de la costa del Cauca (**Guapi**, Timbiquí y **Micay**), hay casi 200 retroexcavadoras en una región de apenas 70 mil habitantes.

“Los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades violando los derechos de las comunidades. La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros)”[9].

El *Código Minero* aprobado en 2001 tiene un efecto negativo para los mineros artesanales, que podrían frenar el despliegue de la minería mecanizada. “Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las llamadas Unidades Productivas Mineras en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista”[10].

En Colombia la minería sigue una lógica y un modo de operar muy similar al negocio de la coca y la cocaína. Un informe de **Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz)**, sostiene que “la minería ilegal no ha desplazado al narcotráfico, por el contrario se sirve de ella para el lavado de sus activos y en algunos casos para ayudar en las finanzas de estos grupos”[11].

El informe de **Indepaz** asegura que en los departamentos de Cauca y **Nariño**, son las Farc y grupos paramilitares como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, los que “controlan actualmente la explotación minera ilegal en la Costa Pacífico”[12]. Las conclusiones del informe son tremendas y abren interrogantes sobre el futuro.

“En zonas como Timbiquí en el Cauca e **Istmia** en **Chocó**, la minería ilegal es el alimento de los grupos armados al margen de la ley que protegen los corredores selváticos por los cuales se mueven los estupefacientes. La presencia de actores armados se justifica por parte de los mineros como un instrumento de prestar seguridad para evitar los atracos y extorsiones”[13].

{destacado-2}

La maquinaria pesada debe pasar por retenes donde debe pagar un peaje a los grupos armados. Los modos de operar son idénticos a los que se conocen para la coca. Se paga un “gramaje minero” para autorizar la explotación; los grupos armados negocian con los dueños de las retroexcavadoras para ingresar la maquinaria y tienen control sobre la cantidad de oro que se extrae para cobrar su porcentaje.

Según el trabajo mencionado, hay variaciones por regiones y por presencia de cada grupo armado en cuanto a los porcentajes que perciben los diversos actores. En todo caso hay coincidencia en el papel

corruptor de la actividad minera ilegal, que genera una vasta red de complicidades muy difíciles de desmontar[14]. Los grandes afectados son los pueblos afros e indígenas, los campesinos y las mujeres y niños que viven en los territorios que albergan oro y otras riquezas.

Al parecer, los diferentes actores se van posicionando de cara a la posible finalización del conflicto armado. En las negociaciones de paz, las Farc han reconocido que en sus planes figura, respecto a la coca, “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”[15]. Algunos observadores, que prefieren el anonimato, creen que la minería puede ser una estrategia de financiamiento alternativa para los grupos que hoy están en armas.

Por **Raúl Zibechi**

24 / junio / 2014

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario **Brecha** de **Montevideo**, docente e investigador sobre movimientos sociales en la **Multiversidad Franciscana de América Latina**, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el Informe Zibechi cada mes para el **Programa de las Américas** (www.cipamericas.org/es).

NOTAS:

[1] **BBC Mundo**, 1 de mayo de 2014.

[2] Noticias **Caracol**, 1 de mayo de 2014.

[3] **Prensa Libre**, 24 de abril de 2014.

[4] **AFP**, 14 de febrero de 2014.

[5] Indepaz, “Impacto de la minería de hecho en Colombia”, **Bogotá**, noviembre de 2012, p. 12.

[6] El **Macizco Colombiano** es un conjunto montañoso de los **Andes** en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, donde nacen los grandes ríos colombianos: el Magdalena y el Cauca (que vierten en el Caribe), el **Putumayo** y el **Caquetá** (de la cuenca amazónica) y el **Patía** (cuenca del Pacífico). Sus alturas llegan a 4.600 metros, tiene más de 300 lagunas y trece páramos, y una gran diversidad biológica. Es una región poblada por campesinos mestizos, afros e indígenas.

[7] Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo negro de la Costa Pacífica de Cauca.

[8] “La minería en la Costa Pacífica del Cauca”, en www.cococauca.org

[9] Idem.

[10] “Estudio sobre la minería a gran escala en la región y sus impactos”, **Jesús López Fernández**, Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, p. 28.

[11] Indepaz, p. 62.

[12] Idem, p. 61.

[13] Idem, p. 62

[14] Idem. p. 63.

[15] ***El Tiempo***, 17 de mayo de 2014.

Tomado de [Programa de las Américas](#)

Fuente primera [fotografía](#)

Fuente: [El Ciudadano](#)